

ECOS DE UNA EMERGENCIA

El fenómeno catastrófico que una vez más azotara las provincias centrales de nuestro territorio, no es un emergente imprevisible, como parecemos empeñados en creer, sino un acontecimiento más de la cadena sísmica a cuya periodicidad vivimos sometidos todos los chilenos.

En efecto, las estadísticas tienden a mostrar una suerte de plan quinquenal telúrico de inquietante regularidad. Esto quiere decir que cada cinco o seis años, en alguna parte de nuestra abrupta geografía, se moverá la tierra, rodarán montañas o saldrá el mar de su cauce natural, con el resultado de muerte, destrucción de viviendas o pánico para nuestros sufridos compatriotas. Y, en consecuencia, cada vez que ello se produzca, el país detendrá su marcha para afrontar la catástrofe con un plan de emergencia, y pondrá en acción la solidaridad nacional e internacional. Se entregará a los damnificados, mediaguas provisionales para reemplazar los hogares destruidos y créditos para reconstruir en precarias condiciones lo que fuera dañado o aniquilado. Las estructuras provisionales se convertirán en definitivas por la lógica fría del desamparo y de la miseria. Las construcciones mal reparadas o las sobrevivientes, esperarán en pie el próximo sismo para caer... Y así sucesivamente, alrededor de un círculo vicioso con una parte de imprevisión y otra de fatalismo.

Pero ya son muchos los técnicos, profesionales y ciudadanos de todos los sectores que creen llegado el momento y alcanzada la potencialidad necesaria para romper la vocación catastrófica —y catastrófica— de nuestro pueblo. La única forma posible sería institucionalizar la emergencia, creando un organismo permanente financiado y dirigido hacia el enfrentamiento de tales situaciones: "La Comisión Nacional de Riesgos y Catástrofes" o como quiera llamársele. Esta institución, capaz de coordinar a treinta minutos de producida la emergencia, la acción de Ministerios, Defensa Civil, Carabineros, Cruz Roja, Bomberos y otros cuerpos de auxilio técnico y social, asumiría el control de situaciones caóticas, sobre la base de prepararse profesionalmente para ello.

El último sismo mostró con toda evidencia que el caos y abandono de los primeros días se debió, no tanto a la falta de capacidad de comunicación y de acción, ni menos a la falta de una voluntad de ayuda ciudadana, cuanto a la incapacidad orgánica de las instituciones para dirigir y coordinar adecuadamente esas fuerzas hacia los sectores que las requerían.

Hay otras constataciones que nos preocupan desde un ángulo profesional:

—Ante todo, la aflictiva situación de decenas de miles de pobladores con sus viviendas destruidas o a medio caer estaba exigiendo con imperativo de urgencia, la presencia de arquitectos y técnicos de construcción. Se les necesitaba como consejeros, decidiendo demoliciones, fijando recetas elementales de reconstrucción para las familias, normas básicas de ocupación del suelo, de recuperación de materiales, de defensa de valores urbanos, etc. Reconozcamos que hubo esa voluntad de ayuda espontánea y generosa por parte de muchos colegas. Pero ésta no fue una movilización organizada ni de obligatoriedad moral. No hubo trabajo sistemático de real proyección social en la acción del arquitecto; y esto, simplemente, porque nuestra profesión no ha alcanzado tal nivel de socialización. Mientras otros gremios como el de los médicos, por ejemplo, de larga tradición de servicio a la comunidad, muestran una capacidad de movilización casi instantánea, el arquitecto no tiene un cauce adecuado para acciones de similar envergadura. El obsoleto sistema de servicios basado en el honorario de acuerdo a aranceles como única relación entre profesional y cliente, hace agua ante las exigencias sociales y demuestra su inutilidad frente a la emergencia. He aquí un desafío planteado al Colegio de Arquitectos, a las Universidades y a la conciencia profesional, donde radica el cambio cualitativo de esa situación.

—En seguida, otro hecho importante. En las provincias y localidades afectadas, el índice de destrucción varía desde un 20 a un 80%. Esto significa que una buena parte de ellas se han constituido en áreas adecuadas para remodelación parcial o integral. Oportunidades únicas y de gran trascendencia en la historia de esas comunidades que permitirán, no solamente su urbanización futura sino una verdadera redefinición económico-regional de su existencia.

¿Se aprovecharán debidamente esas oportunidades?

No olvidemos que desde el momento mismo en que se produce el terremoto aparecen las fuerzas que inevitablemente accionarán para oponerse a la reconstrucción planificada. Estas fuerzas son:

- a) El anhelo comprobado de cada propietario de reconstruir rápidamente su vivienda dañada o destruida, en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones originales.
- b) El crédito y ayuda individual que el Estado otorga para éste propósito.
- c) La utilización precipitada de ciertas áreas urbanas para construir al margen de un plan de remodelación integral, que muchas veces, la iniciativa privada acelera para adelantarse a futuras expropiaciones o el sector público bajo la presión de los pobladores locales.

En consecuencia, aquí emerge un nuevo desafío: esta vez dirigido a Odeplan, al Ministerio de la Vivienda a través de CORMU y Dirección de Desarrollo Urbano, a los Municipios locales, a los organismos de pobladores, etc. Es el reto de la planificación organizada, de la reconstrucción comunitaria, con incorporación de nuevos valores socio-culturales y económicos que incumben a toda la comunidad. Con éstos valores la planificación debe contribuir a vitalizar las raquíticas poblaciones infra-urbanas de nuestro territorio, sin destruir su significación histórica tradicional o sus artesanías.

A poco más de un mes de distancia del hecho que motiva estas reflexiones, aún parece posible unirse para alcanzar estos objetivos.